

Talca, cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

**VISTO, OÍDOS LOS INTERVINIENTES, Y
CONSIDERANDO:**

**A.- EN CUANTO AL RECURSO DE LA PARTE
DEMANDANTE**

1) Que comparece el abogado, Pedro Peña Sánchez, por la demandante en procedimiento ordinario de aplicación general, autos caratulados “Vargas con I. Municipalidad de Curicó”, Rit O-255-2022, interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada el 10 de diciembre de 2022, por Erick Ríos Leiva, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, que acogió parcialmente la demanda en los términos establecidos en lo resolutivo de la resolución recurrida.

2) Que invoca como primera causal de nulidad la recogida en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior. Sostiene este motivo en el hecho que la sentencia recurrida incurre en un error en la calificación jurídica de los hechos, puesto que estimó que los servicios prestados por la demandante no corresponden a aquellos regidos por el Código del Trabajo, sino que los considera de aquellos propios de la contratación bajo un vínculo civil sujeta a honorarios.

3) Que poniendo especial atención en el primer motivo de nulidad planteado, al hilo de lo que más adelante se dirá, y la simple lectura de los hechos dados por establecidos por el tribunal de base, en cuanto a la relación laboral reclamada por la actora, se desprende fácilmente la necesidad de corregir el error (trascendente) en la calificación jurídica de los mismos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

En efecto, la sentencia estimó que jurídicamente las labores para las que fue contratado la demandante desde el inicio de la relación laboral, esto es desde 19 de marzo de 2012 al mes de abril de 2020, califican como cometidos específicos.

Al efecto señaló el juez a quo en el considerando 6º: “(...) De esta manera, resulta evidente que las contrataciones de la actora se enmarcan en los referidos programas de mujeres jefas de hogar, mismos que encuentran su causa directa en los respectivos convenios suscritos entre el Municipio y el SERNAMEG. A su turno, estos programas eran renovados periódicamente al tiempo que tales servicios pactaban nuevos convenios análogos. Llegado a este punto, se debe advertir que la actora de autos no ha reclamado en forma alguna que sus contrataciones a honorarios han transgredido los convenios suscritos entre la Municipalidad y el SERNAMEG, así como tampoco la validez ni los alcances de estos últimos. De hecho, ni siquiera aportó al juicio copia de estos convenios, ni tampoco requirió su exhibición a la contraria en los términos que faculta el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo. Por el mismo motivo, no queda más que estimar que los convenios suscritos entre el Municipio y el SERNAMEG son plenamente válidos y que las contrataciones a honorarios de la actora se ajustan plenamente a dichos pactos. Conforme se ha venido analizando, este juez estima que las contrataciones de la actora, al menos en lo que respecta a su celebración, cumplen cabalmente con las exigencias previstas en el inciso segundo del artículo 4 de la Ley 18.883, pues todas ellas dan cuenta de un “cometido específico”, en donde su especificidad deriva precisamente de la circunstancia que están circunscritos a los programas que nacen de los convenios existentes entre la Municipalidad y el SERNAMEG. Luego, el hecho que estos convenios y programas se hayan renovado sucesivamente a lo largo del tiempo, no hace cesar el carácter de cometido específico, pues



siempre se ajustaron a tales convenios, los que en cada período tenían una duración definida y unos objetivos delimitados. En otras palabras, es irrelevante que las contrataciones de la actora hayan sido renovadas todos estos años, pues en cada periodo ellas se ajustaron a los convenios respectivos. Por estas razones y al menos en lo que respecta a la celebración misma de estos contratos a honorarios, éstos no pueden tenerse como constitutivos de una relación laboral indefinida. Cabe aquí realizar algunas precisiones. Tanto el municipio demandado como el SERNAMEG, en cuanto órganos del Estado y al tenor de lo previsto en el inciso 4° del artículo 1 de la Constitución Política de la República, tienen la finalidad de promover el bien común, existiendo áreas en las que sus mandatos legales se intersectan. En tal sentido, el inciso 2° del artículo 1 de la Ley 18.695 define que la finalidad de las municipalidades es “satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.”. Asimismo, el artículo 3 letra c) de la citada ley establece como función de los municipios “La promoción del desarrollo comunitario”. Adicionalmente, el artículo 4 letra k) del mismo cuerpo legal prevé que las Municipalidades “podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con (...) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. Tal normativa, es plenamente armónica con las funciones encomendadas al SERNAMEG en el artículo 2 de la Ley 19.023, en particular sus literales f) y g) en cuanto entregan a dicho servicio las tareas de “Coordinar con los distintos servicios y organismos públicos la ejecución de las políticas, planes y programas relativos a la equidad de género y a procurar eliminar toda forma de discriminación arbitraria contra las mujeres” y “Celebrar convenios con organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, para el cumplimiento de las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSXPXGJWJFW

funciones y atribuciones del servicio”. Tales preceptos deben además ser concordados con el principio de coordinación contemplado en los artículos 3 y 5 de la Ley 18.575. Así, es especialmente importante el inciso 2° del artículo 5 de la referida ley que prescribe que “Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones”. En tal marco normativo tenemos entonces que la Ilustre Municipalidad de Curicó está en la necesidad de satisfacer entre otras múltiples funciones, la de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, lo que es coincidente con los mandatos legales del SERNAMEG. Al mismo tiempo, la demandada, al igual que el resto de los municipios del país, disponen de medios limitados, lo que se traduce en materia de recursos humanos en una dotación predefinida y acotada, conforme a las diversas calidades jurídicas que la ley prevé para sus servidores. Sin embargo, en aquellas áreas en las que sus funciones coinciden con otros servicios públicos, es perfectamente posible, y no sólo eso, sino que además es deseable, que ejerza programas y actividades coordinadas y/o conjuntas con estos últimos en aras de promover y alcanzar el bien común. De esta manera, desde la perspectiva del interés comunitario es sumamente positivo la existencia de convenios entre los municipios y otros organismos públicos a fin de lograr un cometido más eficaz y eficiente de sus objetivos; y tanto mejor si tales convenios logran extenderse en el tiempo y son ejecutados por profesionales idóneos. En esta línea de análisis, no se ve inconveniente alguno para que estos programas -como aquél en que la actora prestaba sus servicios- sean renovados sucesivamente en el tiempo, siendo esto una cuestión que no tiene ningún reproche desde el punto de vista legal. Conforme a lo dicho, no existe ninguna infracción al inciso 2° del artículo 4 de la Ley 18.883 por la circunstancia que la actora



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

haya prestado servicios por más de 10 años en el Municipio demandado y bajo el cobijo de los programas derivados de los convenios suscritos entre tal entidad y el SERNAMEG. Pensar lo contrario, llevaría al absurdo que los municipios para mantenerse dentro de los márgenes legales deberían cesar los servicios de las y los profesionales adscritos a estos programas, aun cuando hayan realizado un trabajo positivo y de alta calidad, lo que además conspiraría en contra de los señalados principios de eficacia y eficiencia que deben guiar a los organismos públicos, perjudicando en definitiva a la comunidad. En efecto, no sólo hubiese sido perjudicial para la propia actora que el municipio no hubiese renovado su contratación a honorarios una vez celebrado un nuevo convenio con SERNAMEG, sino que ello hubiese sido perjudicial también para las vecinas de la comuna Curicó, pues se les habría privado de los servicios de una profesional idónea, con experiencia y capacitada. Como se viene diciendo y no habiendo existido cuestionamiento alguno a los convenios suscritos en la demandada y el SERNAMEG, así como tampoco respecto de una eventual falta de correspondencia entre éstos y las contrataciones a honorarios de la actora, se debe concluir que en relación a la celebración misma de sus contratos, se cumplen plenamente las exigencias del artículo 4 inciso 2° de la Ley 18.883, en donde la especificidad de sus encargos deriva precisamente de los convenios pactados entre dichos servicios públicos. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para desestimar la demanda de autos, pues toca todavía analizar si la ejecución de los servicios de la actora se ciñó efectivamente al marco de estos contratos. Tal y como se indicase anteriormente, los contratos de la actora en su mayoría en cuanto a la descripción de sus funciones se remiten de manera explícita a los programas de los que dan cuenta los convenios suscritos en cada caso con el SERNAMEG, ya sea como encargada o coordinadora de los mismos. Por su parte, la prueba testimonial de la actora



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

tiende a circunscribir las labores efectuadas por ella a los márgenes de los citados programas. Así, la testigo doña Natalia De Los Ángeles Bustos Camilo, sostuvo que la demandante era coordinadora comunal del programa jefas de hogar, explicando que éste respondía a un convenio entre la Municipalidad y el SERNAMEG. Además, señaló que la actora “debía cumplir con todos los lineamientos del cargo”. En un sentido similar, el testigo don Pedro Alexis Maturana Valenzuela refirió que la demandante trabajaba para la municipalidad de Curicó “en un programa dependiente del SERNAMEG”, y al ser consultado por sus labores específicas dijo que ella ejecutaba el programa jefas de hogar y que eso conllevaba una serie de tareas tales como el diagnóstico de la situación local, el diseño y planificación del proyecto comunal y la ejecución de diversas actividades vinculadas con su cargo. Sin perjuicio de ello, sostuvo además que la actora también ejecutaba labores propias de la municipalidad y que eran ajenas al programa para el que había sido contratada. Sin embargo, sobre este último punto, no dio razón de sus dichos, al no haber referido ninguna actividad o labor concreta y, de hecho, al ser después nuevamente consultado sobre cómo era el “día a día” del trabajo de la demandante, se limitó a señalar que éste se concentraba en la planificación del trabajo con las mujeres, detallando que eso se traducía tanto en talleres como en trabajo administrativo como, por ejemplo, poblar el sistema informático con todos los datos aportados por las acciones del programa, a lo que cabía adicionar labores colaborativas con otros colegas de la región por su experticia en materia de emprendimiento femenino. Como se puede ver, los dichos de este testigo, más allá de la escueta y genérica afirmación relativa a que la actora también realizaba labores que excedían el objeto de sus contrataciones, fueron bastante específicos y claros en circunscribir las tareas concretamente descritas a los programas derivados de los convenios con



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

SERNAMEG. A su turno, la testigo doña Paula Estefanía Hernández Díaz, sostuvo que la actora era la encargada comunal del programa mujer jefas de hogar y que “veía todo lo del programa”. No obstante lo anterior, dijo además que ella también realizaba “otras actividades de la municipalidad” y al ser consultada sobre a qué tipo de actividades se refería, dijo que ello respondía a “ferias en la plaza”, “día de la madre”, “día de la mujer” y “Spa en tu barrio”, señalando, por ejemplo, que en una ocasión estuvieron hasta tarde tomando datos de mujeres, para manicure, masajes, verano entretenido en la playa o incluso debían servir almuerzo a las mujeres que ahí participaban. No obstante estos dichos, no resulta claro para este juez que las tareas mencionadas por la testigos sean ajenas a los programas para los cuales fue contratada la demandante; primero, pues a falta de todo mayor detalle, al menos en principio parecen vincularse con temáticas que comúnmente pueden ser comprendidas como propias de la temática de género y cuyas beneficiarias pueden perfectamente ser mujeres jefas de hogar del programa; y segundo, porque se debe recordar que la actora en su demanda no realizó mención ni cuestionamiento alguno a los convenios suscritos entre la municipalidad y el SERNAMEG, así como tampoco aportó al juicio dichos instrumentos ni tampoco solicitó su exhibición a la contraria, correspondiendo a ella la carga de haber acreditado la existencia de una verdadera relación laboral indefinida. Con la información hasta ahora analizada, pareciera que en autos no es posible fundar una relación laboral entre la actora y el municipio, pues sus contrataciones respetaron los márgenes del artículo 4 inciso 2° de la Ley 18.883 y además porque la ejecución de sus labores respetó los márgenes establecidos en sus contratos y consecuentemente las exigencias del citado precepto”.

4) Que para esta Corte, de los hechos acreditados es posible concluir sin dudas que hubo un exceso en la contratación por parte del ente



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

municipal, claramente fuera del marco normativo del artículo 4 de la ley 18.883 y que, además, al haber índices de subordinación y dependencia, correspondía y corresponde estimar a la relación habida entre las partes como una de carácter laboral.

Los elementos propios de un régimen de subordinación y dependencia que se encuentran acreditados en -y que de acuerdo la calificación jurídica del juez de base no constituyen elementos esenciales de un contrato de trabajo- se encuentran recogidos como tales en el Considerando 6mo de la sentencia recurrida, en los cuales se indica: “6º: (...) En un sentido similar, el testigo don Pedro Alexis Maturana Valenzuela refirió que la demandante trabajaba para la municipalidad de Curicó “en un programa dependiente del SERNAMEG”, y al ser consultado por sus labores específicas dijo que ella ejecutaba el programa jefas de hogar y que eso conllevaba una serie de tareas tales como el diagnóstico de la situación local, el diseño y planificación del proyecto comunal y la ejecución de diversas actividades vinculadas con su cargo. Sin perjuicio de ello, sostuvo además que la actora también ejecutaba labores propias de la municipalidad y que eran ajenas al programa para el que había sido contratada. Sin embargo, sobre este último punto, no dio razón de sus dichos, al no haber referido ninguna actividad o labor concreta y, de hecho, al ser después nuevamente consultado sobre cómo era el “día a día” del trabajo de la demandante, se limitó a señalar que éste se concentraba en la planificación del trabajo con las mujeres, detallando que eso se traducía tanto en talleres como en trabajo administrativo como, por ejemplo, poblar el sistema informático con todos los datos aportados por las acciones del programa, a lo que cabía adicionar labores colaborativas con otros colegas de la región por su experticia en materia de emprendimiento femenino. (...) A su turno, la testigo doña Paula Estefanía Hernández Díaz, sostuvo que la actora era la encargada comunal



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

del programa mujer jefas de hogar y que “veía todo lo del programa”. No obstante lo anterior, dijo además que ella también realizaba “otras actividades de la municipalidad” y al ser consultada sobre a qué tipo de actividades se refería, dijo que ello respondía a “ferias en la plaza”, “día de la madre”, “día de la mujer” y “Spa en tu barrio”, señalando, por ejemplo, que en una ocasión estuvieron hasta tarde tomando datos de mujeres, para manicure, masajes, verano entretenido en la playa o incluso debían servir almuerzo a las mujeres que ahí participaban. No obstante estos dichos, no resulta claro para este juez que las tareas mencionadas por la testigos sean ajenas a los programas para los cuales fue contratada la demandante; primero, pues a falta de todo mayor detalle, al menos en principio parecen vincularse con temáticas que comúnmente pueden ser comprendidas como propias de la temática de género y cuyas beneficiarias pueden perfectamente ser mujeres jefas de hogar del programa; y segundo, porque se debe recordar que la actora en su demanda no realizó mención ni cuestionamiento alguno a los convenios suscritos entre la municipalidad y el SERNAMEG, así como tampoco aportó al juicio dichos instrumentos ni tampoco solicitó su exhibición a la contraria, correspondiendo a ella la carga de haber acreditado la existencia de una verdadera relación laboral indefinida. Con la información hasta ahora analizada, pareciera que en autos no es posible fundar una relación laboral entre la actora y el municipio, pues sus contrataciones respetaron los márgenes del artículo 4 inciso 2° de la Ley 18.883 y además porque la ejecución de sus labores respetó los márgenes establecidos en sus contratos y consecuentemente las exigencias del citado precepto (...). Sin embargo, no se puede dejar de atender las declaraciones de la testigo de la municipalidad doña María Pilar Contardo Jofré, quien detenta el cargo de directora del Departamento de Desarrollo Comunitario de Curicó y que es precisamente el departamento al



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

cual se encontraban adscritos los programas para los cuales la demandante prestaba sus servicios. Dicha testigo, en general dio cuenta de las características de los programas que se derivan de convenios con otras entidades públicas y en especial aquellos suscritos con SERNAMEG. Además, relató los periodos en que la actora fue contratada a honorarios por la municipalidad, así como también las labores que realizaba como coordinadora del programa mujeres jefas de hogar. Sin embargo, reconoció que no siempre ejerció sus labores dentro de los márgenes de dichos programas, refiriendo que en el año 2020 y como corolario de la pandemia por COVID 19, la municipalidad se vio en la necesidad de hacer frente a una serie de contingencias, en las que la demandante colaboró. Así, sostuvo que la municipalidad tuvo cuatro grandes focos que la obligó a adaptarse al nuevo escenario, esto es, asistencia social, registro social de hogares, entrega de alimentos del programa alimentos para Chile y el programa de cocinas solidarias. En este contexto explicó que había muchos funcionarios que por temas de salud y edad estaban con teletrabajo y que había otros servicios públicos colaboradores que tampoco podían realizar sus tareas. Es por ello que tratándose de los programas por convenios con otras instituciones, la municipalidad acordó con sus contrapartes que quienes prestaban servicios en dichos programas colaborasen con las funciones ya mencionadas (asistencia social, registro social de hogares, entrega de alimentos del programa alimentos para Chile y el programa de cocinas solidarias). Así, declaró que esto es lo que pasó en el caso de la actora, pues en esa época tuvo que prestar servicios, especialmente en materia del registro social de hogares. Posteriormente, aclaró que “lo más grueso” de estas colaboraciones de la demandante en materias propias de la contingencia de la pandemia se realizó entre los meses de abril y agosto o septiembre de 2022. Consultada por el tribunal de base si estos cambios se hicieron constar en anexos a los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSXPXGJWJFW

contratos y/o en algún tipo de decreto, refirió que ello no ocurrió, que sólo hubo reuniones con SERNAMEG de las cuales se levantaron actas y que “parece” que SERNAMEG emitió un documento.

Conforme a estos hechos acreditados y establecidos, esta Corte es del parecer que no tienen la entidad jurídica para denominarlos y hacerlos coherentes con el artículo 4 de la ley 18.883. En otras palabras, no constituyen un, cometido específico ni tampoco funciones habituales y accidentales.

En ese sentido, se encuentran fuera del marco legal autorizado para contratar honorarios. i. En cuanto a que no constituyen “cometidos específicos” conforme al artículo 4 de la ley 18.883. Si bien este concepto no está definido en la ley, se ha delimitado jurisprudencialmente y, en tales circunstancias, han sido los Tribunales Superiores de Justicia quienes se han pronunciado al respecto dotando de contenido a este “concepto abierto”. Así, en Sentencia de Unificación de Jurisprudencia Rol de Ingreso 5699-2015 de fecha 19 de abril de 2016, la Excelentísima Corte Suprema ha estimado que constituyen cometidos específicos “aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente -en caso alguno de un modo continuo-, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente municipal”. Lo mismo indica en el Sentencia de Unificación de Jurisprudencia Rol de Ingreso 31160-2016 de fecha 10 de noviembre de 2016, pero agregando que los “cometido específico” “son aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar de manera permanente conforme dicha modalidad.” Agrega luego que por cometidos específicos, las tareas puntuales perfectamente individualizadas o determinadas con claridad



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

en el tiempo y que, sólo por excepción, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente. Asimismo, recientemente en Sentencia de Unificación de Jurisprudencia Rol de Ingreso 35151-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, expresando: “Que es justamente la determinación de estos tópicos de especificidad y ocasionalidad que deben ser esclarecidos para después decidir el estatuto aplicable a la situación concreta que se analiza, por lo que se hace necesario aclarar qué son “labores accidentales y no habituales”, siendo aquéllas las que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, las tareas puntuales perfectamente individualizadas o determinadas con claridad en el tiempo y que, sólo por excepción, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente.

Tal calificación jurídica es correcta sólo en cuanto a lo señalado que se produce desde el mes de abril del año 2020, debido a que se acreditaron con los medios de prueba, que la concurrencia de acciones que no se encontraban descritas en sus respectivos contratos, no tienen relación alguna con el concepto de cometidos específicos ya citado, especialmente, en cuanto a los requisitos que importan tal cualidad. En efecto, las funciones acreditadas no son perfectamente distinguibles y determinadas y se realizan de manera continua.

De hecho, el considerando 6to cita y da cuenta de elementos propios y constitutivos de una relación de subordinación y dependencia de la demandante en beneficio de la demandada, y que estos servicios de prestaron sin solución de continuidad, pues, tal como indica, estos se ejecutaron ininterrumpidamente entre 19 de marzo de 2012 a 01 de julio de 2022. De esta forma, esta parte advierte que dicha extensión en su ejecución de forma continua hace imposible que jurídicamente sean calificados como



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSXPXGJWJFW

específicos, pues atenta contra la definición indicada por la Excelentísima Corte Suprema.

De lo expuesto, es claro que a diferencia de lo estimado por el juez en su fallo, se puede inferir que las funciones para las cuales fue contratada la actora se encuentran lejos y son perfectamente distinguibles de que debe entenderse por un “cometido específico”. En efecto, lo jurídicamente relevante es cómo se desempeñan esas labores, el tiempo que se han ejecutado y la injerencia que tiene en su desarrollo la demandada. Esa consideración es lo que ha dictado la adecuada doctrina jurisprudencial de las sentencias de Unificación de Jurisprudencia en esta materia.

En este sentido, carece de toda relevancia si su ejecución está sujeta a un determinado ítem de un presupuesto municipal; o bien, que dicho presupuesto, se renovaba cada año, pues en los hechos, estas labores se dieron sin interrupción durante todo el periodo indicado en la demanda de autos, siendo un rasgo que va en directa contraposición de lo que se ha entendido como cometido específico máxime si se desarrolla con ocasión de una labor permanente, tal como se ha dado en este caso en concreto.

Por todo lo anteriormente expuesto, el juez de base no debió haber calificado como cometido específico las labores que realizó la actora, sino que debió imputarle la calidad de genéricos y así no circunscribirlo a la norma del artículo 4 de la ley 18.883.

Y en tal sentido, es necesaria la alteración de la calificación jurídica dado que la errónea calificación influye sustancialmente en la sentencia (trascendencia), debido a que tal consideración jurídica implicó rechazar la demanda incoada por la demandante, toda vez que se consideró que la contratación y la prestación de labores cumplió con lo determinado en el Estatuto Administrativo Municipal en tanto Contrato de Honorarios.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

En síntesis, una correcta calificación jurídica de los hechos acreditados hubiera indicado que la relación se refería a una ajena a la indica el artículo 4 del Estatuto Administrativo Municipal; que el Municipio no cumplió con el principio de legalidad que implica la facultad de contratación bajo la modalidad de honorarios y por lo tanto hubo exceso en la contratación.

5) Que en cuanto aparece meridianamente claro y establecido que la actora desarrolló labores habituales y de forma continua y que la correcta calificación jurídica de las labores desarrolladas por dicha parte tiene relación con aspectos habituales de la Municipalidad de Curicó.

No huelga subrayar que la Municipalidad de Curicó, constituye una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comuna de Curicó y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la misma. Así las cosas, la Municipalidad en orden a las labores encomendadas por el mero ministerio de la ley en beneficio de los habitantes de la comuna y cumpliendo con lo señalado en el artículo 4 letra a) de la Ley 18.695, en lo que señala que “Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: a) La asistencia social; e) La capacitación y la promoción del empleo”.

Por lo anterior, la correcta calificación jurídica de las labores debió hacerse, además, conforme a la línea de habitualidad que tienen las municipalidades en materias destinadas a impulsar el fomento de actividades de asistencia social y promoción de la capacitación del empleo de su comuna, lo cual se traduce en el caso en concreto a los convenios realizados con SERNAMEG, lo cual viene determinado por mero imperio de la ley.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

En consecuencia, la labor que ejercía la demandante como trabajadora del Municipio, constituía una labor habitual de la institución. Por lo tanto, a riesgo de ser majaderos en esta idea, la correcta calificación jurídica de las labores debió hacerse, además, conforme a la línea de habitualidad que tiene el municipio demandado en el desarrollo de sus funciones y el desempeño del desarrollo laboral de sus funcionarios.

No es óbice a esta conclusión el hecho que los servicios se hayan realizado en un convenio determinado, ya que esto no transforma las labores en no habituales, accidentales, ya que lo que importa a estos efectos, y que debe cobrar relevancia es cómo se prestaron estos servicios, sobre todo teniendo en consideración que las labores de mi representada dicen relación con una función propia de la Municipalidad demandada.

6) Que los hechos establecidos en la sentencia constituyen al parecer de esta Corte índices de subordinación y dependencia. Desde luego, el juez yerra al concluir en el considerando 8vo que los servicios prestados por la demandante no se prestaban bajo un vínculo de subordinación y dependencia. Los hechos acreditados dicen relación con la necesaria alteración de su calificación jurídica en razón a los índices de subordinación y dependencia.

En efecto, es posible observar que entre las partes existió una jornada de trabajo, un horario, una determinada dependencia de una jefatura, una prestación de servicios sin solución de continuidad, entre otras manifestaciones.

A tales hechos establecidos, cabe dar una adecuada calificación jurídica en directa relación con lo expuesto en este arbitrio de nulidad en razón al exceso en la contratación según cometidos específicos y bajo la modalidad de honorarios. En definitiva, la correcta calificación jurídica de los hechos en su conjunto implica sendos índices de subordinación y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

dependencia y correspondió entonces calificarlos como tales por parte del juez de primer grado.

Así también la continuidad y la emisión de boletas permanentemente recibiendo una suma mensual determinada, hacen parecer esta contraprestación más bien a una de carácter estable, regular y periódica, como lo es la remuneración conforme al artículo 41 y siguientes del Código del Trabajo, además de reconocer los índices de subordinación y dependencia.

Todos éstos son elementos propios del artículo 7 del Código del Trabajo, cuestión que habilita también la aplicación del artículo 8 del mismo texto legal cuando este indica que “toda prestación” que se realice conforme al precedente artículo hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. En consecuencia, correspondía entonces calificar que las labores ejecutadas por la actora se prestaron bajo un claro índice de subordinación y dependencia, lo que impone acoger el primer motivo de nulidad impetrado en el recurso de marras.

7) Que invoca, como segunda causal, subsidiaria, la contemplada en el mismo artículo 477, parte segunda, esto es, infracción de ley que haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Debido a que se acogerá el motivo principal, se omite pronunciamiento sobre esta causal subsidiaria.

B.- EN CUANTO AL RECURSO DE LA DEMANDADA

8) Que comparece el abogado, Pedro Figueroa Sepúlveda, por la parte demandada en estos mismos autos ya individualizados, interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva también identificada al inicio de esta sentencia.

9) Que invoca tres causales en forma conjunta o simultánea: a) la del artículo 477 parte segunda del Código del Trabajo; b) la del artículo 478 b)



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

del Código del Trabajo, esto es, el haber sido dictada la sentencia con infracción manifiesta de las normas de apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica; y c) la del artículo 478 e) esto es, cuando la sentencia... otorgaré más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal.

10) Que el recurrente por la parte demandada ha optado por la interposición conjunta de causales o motivos de forma y fondo. Esta opción, en un recurso de las particularidades del presente arbitrio, es errada, pues busca impugnar una misma decisión del fallo sustentando el recurso en causales, en forma simultánea, que en este caso no resulta compatible y torna racionalmente imposible su resolución.

En efecto, si se deduce la causal del artículo 477 sobre infracción de ley, implica que el recurrente acepta la validez formal del proceso y de la sentencia, vale decir, asume que se han cumplido todas las exigencias legales de rigor, pero lo que reclama es que el derecho ha sido mal aplicado al caso concreto, con lo que, además, admite que los hechos son los establecidos en la sentencia recurrida.

11) Que el recurrente de nulidad por la demandada parece haber olvidado que este recurso impone y exige, para tener posibilidades de prosperar, una diligencia a la hora de plantearlo y alegarlo en sintonía con el estándar más exigente de un recurso de esta especie que, además de las características que se le suelen reconocer. Esta diligencia y exigencia no se ha satisfecho, lo que ha quedado palmariamente en evidencia, lo que obliga a esta Corte a desechar su recurso y las tres causales planteadas conjunta o simultáneamente atendiendo a lo ya expresado en el raciocinio precedente.

Conforme a lo razonado, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA**, sin costas, el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada, y **SE ACOGE**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado de la parte demandante, contra la sentencia definitiva de causa Rit O-255-2022, dictada el 10 de diciembre de 2022, por Erick Ríos Leiva, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, debiendo consecuentemente dictarse seguidamente, sin nueva vista, una sentencia de reemplazo.

Dictase seguidamente, sin nueva vista, sentencia de reemplazo.

Redacción del Abogado Integrante, don Diego Palomo Vélez.

Regístrese.

Rol Corte Núm. 2-2023/ Laboral.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante don Diego Palomo Vélez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse ausente.

 Moisés Olivero Muñoz Concha Ministro Corte de Apelaciones Cuatro de agosto de dos mil veintitrés 12:05 UTC-4		 GERARDO FAVIO BERNALES ROJAS Ministro Corte de Apelaciones Cuatro de agosto de dos mil veintitrés 12:28 UTC-4	
--	---	---	---



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Moises Olivero Muñoz C., Gerardo Favio Bernales R. Talca, cuatro de agosto de dos mil veintitres.

En Talca, a cuatro de agosto de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMSPXGJWJFW

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Talca, cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Se reproducen la sentencia, pero se eliminan los considerandos 7 a 12; asimismo se reproducen los considerandos de la sentencia de nulidad, y se declara:

1) Que si bien reconoce haber emitido boletas de honorarios a nombre de la Municipalidad de Curicó, bajo la aplicación del principio de supremacía de la realidad que gobierna las el Derecho del Trabajo - en la práctica - recibió la contraprestación directamente del Departamento de Administración y Finanzas de la demandada, por montos equivalentes y mensuales durante toda la vigencia de la relación laboral, previa confección de un Informe Mensual de Actividades que se adjuntaba a la boleta emitida a nombre la ex empleadora y del cual el Municipio guardó registro. En consecuencia, existió relación laboral en los términos expuestos y acreditados por la actora.

Así, a efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, la última remuneración íntegra que recibió ascendió a \$1.190.000 mensuales. Pues bien, la demandante se vio en la necesidad de autodespedirse ante los incumplimientos graves de su empleadora a las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo y ésta le adeuda las cotizaciones de seguridad social, por todo el período de la relación laboral, según liquidación que practique el Tribunal, al hilo de lo que se está resolviendo a propósito del recurso de nulidad acogido a la actora.

En consecuencia, se hará lugar a que la empleadora demandada incurrió en la causal de término de la relación laboral contemplada en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo y que la actora en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXZWGWMWJFW

virtud del artículo 171 del Código del Trabajo procedió justificadamente con fecha 1 de julio de 2022 a la figura del despido indirecto.

2) Que en lo que liga estrictamente con la nulidad del despido planteado por la demandante la Excelentísima Corte Suprema ha sido clara desde hace tiempo en el sentido que si bien es común que los Municipios sostengan que, por la naturaleza “civil” que tenían los contratos celebrados por las partes, desde que el demandante inicio su relación laboral con la demandada, ésta estaba impedido de efectuar cotizaciones, ello en aplicación del principio de legalidad, por lo que resultaría improcedente la condena al pago de cotizaciones previsionales, el máximo Tribunal de nuestra República ha desestimado a través del recurso de unificación de jurisprudencia, considerando que “(...) la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, el cual es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde a él mismo sufragar, dentro del plazo que la ley fija”.

De esta manera, “(...) la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos respectivos”.

En el mismo orden de razonamiento, reitera la Corte Suprema “(...) la sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En efecto,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXZWGGMWJFW

sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo demanda de cobro de prestaciones con el objeto de que se condenara a la demandada, además de declarar el despido injustificado, al pago de las cotizaciones previsionales y de salud porque no habían sido solucionadas, a lo cual se accedió en la respectiva sentencia”.

En definitiva, por tratarse la sentencia del grado de una de naturaleza declarativa, significa que solo se constata la existencia del vínculo del trabajo, esto es, se reconoce su existencia como una situación jurídica válida y preexistente, que se prolongó durante el lapso que se extendió la relación laboral, de manera que si las cotizaciones de seguridad social no fueron pagadas de acuerdo con las remuneraciones que correspondían, debió accederse a su pago íntegro.

Y visto lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 9, 63, 67, 69, 71, 73, 160, 162, 171, 172, 173, 425 y siguientes y demás aplicables del Código del Trabajo, SE RESUELVE que se hace lugar a la demanda interpuesta por María Paz Vargas Osses en contra de la Municipalidad de Curicó, representada por su alcalde Javier Muñoz Riquelme, y en consecuencia se dispone:

a) La relación laboral, la continuidad de ésta, la nulidad del despido, que el despido indirecto está justificado, y que, por ende, se le adeudan los siguientes conceptos a que se condena a la demandada, con reajustes e intereses:

1. Indemnización sustitutiva de aviso previo, por \$1.190.000.
2. Indemnización por años de servicio, por \$11.900.000.
3. Recargo del 50% de la indemnización por años de servicio, por \$5.950.000.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXZWGGMWJFW

4. Feriados: - Feriado legal, por \$8.766.333 que equivalen a 221 días (10 años). - Feriado proporcional, por \$223.125 que equivalen a 6,25 días (3 meses y 12 días).

5. Otras prestaciones. - Cotizaciones de seguridad social durante todo el periodo que duró la relación laboral, según liquidación que practique el Tribunal. Las que deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, denominada “Ley Bustos”, según liquidación a practicar.

b) Se condena en costas a la parte demandada.

Redacción del Abogado Integrante, don Diego Palomo Vélez.

Regístrese y devuélvase.

Rol Corte Núm. 2-2023/ Laboral.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante don Diego Palomo Vélez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse ausente.

 Moisés Olivero Muñoz Concha Ministro Corte de Apelaciones Cuatro de agosto de dos mil veintitrés 12:05 UTC-4		 GERARDO FAVIO BERNALES ROJAS Ministro Corte de Apelaciones Cuatro de agosto de dos mil veintitrés 12:28 UTC-4	
--	---	---	---



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXZWXGMWJFW

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Moises Olivero Muñoz C., Gerardo Favio Bernales R. Talca, cuatro de agosto de dos mil veintitres.

En Talca, a cuatro de agosto de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXZWXGMWJFW